

EXCLUSIÓN EN LA POLÍTICA: UN TIPO DE VIOLENCIA DISFRAZADA

Por Natividad Cárdenas Morales
Presidenta del Consejo Ciudadano para la Promoción
y Defensa de los Derechos Políticos de las Mujeres

La Constitución General de la República Mexicana establece desde 2001, en sus artículos 1º y 2º la prohibición de toda discriminación por género y la igualdad ante la ley de hombres y mujeres, preceptos constitucionales que se expresan en materia electoral en los artículos 219 y 220 del recientemente reformado *Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales* (2008), que ordena tanto a partidos como a autoridades electorales el cumplimiento de cuotas mínima de género en el registro de candidaturas al poder legislativo de la Unión.

En apoyo de este propósito el *Código* reformado, estipula que los partidos políticos habrán de destinar al menos 2% del financiamiento público ordinario que reciben a través del Instituto Federal Electoral (alrededor de 4.2 millones de dólares anuales), a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres.

Pero a pesar del nuevo marco normativo y sus implicaciones financieras, la composición por género del Congreso no experimentó variaciones significativas en los últimos comicios federales, si acaso la participación de las mujeres sólo **creció en 3.2 puntos porcentuales!!**

Persiste una subrepresentación de las mujeres en los puestos de elección popular que contrasta con el hecho de que las mujeres ascendemos al 51.78% del padrón federal electoral, a poco más del 54% de la matrícula agregada de ciencias sociales y políticas de las universidades públicas del país y conformamos en forma abrumadora la base militante, la trinchera organizativa, el trabajo de a pie de todos los partidos políticos en México, por sólo mencionar tres factores co-determinantes de la competencia política profesional. Sin embargo en los partidos políticos las mujeres resultan hasta cierto punto invisibles ya que no hay una cultura interna que permita la equidad en la competencia por las candidaturas.

La reciente reforma del *Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales*, que establece una cuota mínima por género del 40% para el registro de candidaturas federales, contó para su aprobación con

el apoyo unánime de todos los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión.

De hecho, cuatro de los nueve partidos políticos con registro federal, establecen en sus Estatutos cuotas de género superiores al 40%. No obstante, en la práctica los partidos recurren a diversos subterfugios legales o procedimentales que hacen nugatorio este derecho, en los que destaca la renuncia *voluntaria* de las candidatas triunfadoras a favor de sus suplentes varones una vez calificados los comicios, con lo que se vulnera por completo por la vía de la simulación el espíritu de la norma.

En forma velada se manifiestan como justificaciones de estas prácticas la falta de interés por parte de las mujeres en participar como candidatas a legisladoras federales o su falta de preparación y por ende la necesidad de obviar de algún modo su cumplimiento.

Las organizaciones ciudadanas de mujeres, como el Consejo Ciudadano para la Promoción y Defensa de los Derechos Políticos de las mujeres, hemos reclamando reiteradamente estos vicios y propuesto que se normen expresamente como ilegales, hemos propuesto también colaborar junto con el Instituto Federal Electoral, en la identificación y apoyo de precandidatas y líderes partidistas, en acciones que ofrezcan una visibilidad indiscutible a las muchas mujeres preparadas y deseosas de participar en política, y que presten ayuda a la promoción y defensa de sus derechos político electorales.

Sobre la base de los apoyos previstos por el artículo 78 del reformado *Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales*, y al efecto de implementar las nuevas normas legales que fijan cuotas mínimas de género del 40% en el registro de candidaturas federales e impulsar en general una mayor participación de las mujeres en los niveles de toma de decisiones de los partidos políticos nacionales, el Consejo General del Instituto Federal Electoral emitió tanto el *Acuerdo CG10/2008* como el *Acuerdo CG28/2009* estableciendo que los partidos políticos deberán canalizar en su conjunto un total de 50.8 millones de pesos durante 2008 y de 56.2 millones durante 2009, en forma exclusiva y directa al financiamiento de actividades de promoción, capacitación y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, con cargo a los recursos provenientes de sus prerrogativas públicas ordinarias ministradas por el Instituto Federal Electoral.

No obstante estos importantes apoyos, la participación de las mujeres dentro de la Cámara de Diputados, por ejemplo, sólo pasó después de las elecciones federales 2009, del 23.6% en la anterior legislatura a 26.6% en la actual (tomando en cuenta ajustes por renuncia). Estos datos reflejan con claridad meridiana los avances y vacíos en la implementación de la política de cuotas de género: Se obliga con éxito a los partidos a respetar cuotas mínimas de género en el registro de candidaturas federales, se logra impulsar simultáneamente el gasto partidista (subsidiado) más cuantioso de toda América Latina en apoyo a la equidad de género, pero a final de cuentas no se

logra alterar significativamente el nivel de acceso de las mujeres al poder legislativo federal.

Es necesario modificar la legislación electoral a fin de eliminar las vergonzosas vías de simulación a través de las cuales se vicia y conculca el derecho efectivo de las mujeres a disfrutar de cuotas mínimas de registro de candidaturas, lo que cabe lograr a través de las siguientes reformas urgentes:

- ✚ Elevar a rango constitucional la igualdad de género, adicionando para tal efecto al artículo primero de nuestra Carta Magna un tercer párrafo que señale: ***Los hombres y las mujeres disfrutarán de igualdad plena en derechos y oportunidades en los ámbitos económico, de toma de decisiones y en la vida social, cultural y civil,***
- ✚ Si no aseguramos carácter constitucional y por lo tanto valor de ley suprema a la igualdad de género, su alcance real queda sujeto a las distintas interpretaciones de instancias administrativas y jurisdiccionales locales, resultando en la práctica ineficaz para enfrentar los enormes retos de inequidad de género presentes en la integración de la mayoría de los órganos de decisión en el país. Baste llamar la atención en este sentido, sobre la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia en materia de cuotas de género en el registro de candidaturas del Estado de Veracruz, obligada a reconocer por falta de fundamento constitucional expreso, la incompatibilidad e improcedencia del marco electoral federal sobre el local.
- ✚ Es necesario también introducir reformas al **artículo 115 Constitucional para incorporar la obligatoriedad de que el Ayuntamiento se integre de paritariamente**, así como para establecer cuotas mínimas de género en la integración de los consejos municipales indígenas cuya determinación se rige mediante usos y costumbres. El mecanismo de cuotas en el registro de candidaturas federales ha logrado elevar el número de legisladoras en el Congreso de la Unión en un lapso de cuatro legislaturas. Su adopción a nivel municipal puede romper la inercia que durante las últimas décadas ha limitado la participación de las mujeres a no más del 4.5% del total de los ayuntamientos del país. Sin esta reforma constitucional todas las políticas de igualdad de género dejarían prácticamente sin tocar al México profundo.
- ✚ Hacer obligatorio que en el registro de candidaturas a puestos de elección popular sean del mismo género tanto el titular como el suplente de cada fórmula;
- ✚ Establecer como requisitos para partidos y agrupaciones políticas la integración paritaria de órganos directivos por designación; y en el caso de que estos órganos se elijan por procedimientos democráticos, el que se prevean cuotas mínimas de género en el registro de candidaturas y pre-candidaturas a cargos partidistas;

- ✚ Incorporar al *Código* la obligatoriedad para los partidos políticos de aplicar al menos el 2% de las prerrogativas públicas ordinarias que anualmente reciben, al financiamiento de actividades de capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres. Este instrumento clave en el empoderamiento político de las mujeres dentro del sistema de partidos tiene su sustento actual exclusivamente en acuerdos anuales del Consejo General del Instituto Federal Electoral, es necesario darle un mayor cobijo legal y permanencia; y por último,
- ✚ Tipificar sanciones específicas dentro del Código Electoral para violaciones de la normatividad electoral en materia de género, ya que norma cuyo incumplimiento no está sujeto a sanción se convierte para todo efecto práctico en sólo un exhorto o, peor aún, en letra muerta.

Estas reformas constitucionales y de legislación electoral secundaria se desprenden de compromisos internacionales suscritos solemnemente por el Estado Mexicano y se derivan de propuestas generadas a lo largo de décadas de intenso trabajo colectivo de numerosas organizaciones de mujeres. Algunas incluso han sido turnadas ya para su estudio y dictamen a diferentes comisiones del Congreso de la Unión por iniciativa de diputadas de distintos partidos.

Representan en su conjunto un paso obligado para garantizar gobiernos en cuya integración se refleje la misma pluralidad de género que registra el electorado y conforman el reto de nuestra generación en la inacabada tarea por lograr la plena igualdad política de mujeres y hombres.

Porque las mujeres queremos:

La mitad del cielo, la mitad de la tierra, la mitad del poder.

La Editorial de **VOX LOCÁLIS** no se responsabiliza de los juicios y opiniones expresados por los autores en sus artículos y colaboraciones.